

¿Hacia un nuevo liderazgo sociopolítico? Ensayo sobre la convocatoria social de los empresarios

Francisco Valdés Ugalde

I. Introducción

TANTO EN LA TEORÍA SOCIOLÓGICA como en el análisis del desarrollo capitalista, el estudio de las clases dominantes y el personal profesional del que se rodea ha sido uno de los temas centrales para la explicación de la dinámica de la sociedad moderna. La posición que se adopta ante este fenómeno imprime una huella epistemológica decisiva, con consecuencias determinantes para el análisis.

Aunque por razones de extensión mi punto de vista al respecto se expone a lo largo de este artículo, quiero adelantar brevemente algunos supuestos esenciales. Primero se sostiene que para asegurar su desarrollo la clase económicamente dominante, es decir, los propietarios privados de los medios fundamentales de reproducción de la vida social, requiere que el Estado transfigure su interés en el interés general de toda la sociedad. Esta operación se lleva a cabo en el marco de un proceso general de lucha por establecer el contenido práctico y simbólico de ese interés común.¹

¹ Queda fuera de esta perspectiva analítica cualquier suposición voluntarista o instrumentalista respecto al establecimiento de este interés en y por el Estado. El énfasis en la complejidad de las luchas sociales como componente primordial de las relaciones que establecen los diferentes agentes, descarta la simple imposición de un interés privado como interés de toda la sociedad para privilegiar, así, la observación de los procesos e instancias mediante los cuales se transforman los contenidos simbólicos de la acción. En este sentido, es evidente que todo Estado capitalista admite y garantiza la propiedad

En segundo término, se entiende que la forma de realizar el interés privado de la clase dominante varía de acuerdo al estado que guarda el proceso de acumulación económica, así como a las relaciones entre las distintas clases sociales y entre los estados en el plano internacional. Asimismo, se da por entendido que la clase dominante incluye también a aquellos que participando directa o indirectamente, individual o grupalmente, en la acumulación privada de capital, desempeñan las funciones de gobierno general de la sociedad por medio del régimen político. Las relaciones entre esos dos grandes grupos de las clases dominantes no son armónicas por definición, aunque tienden a buscar el equilibrio organizando consensos sobre las finalidades de la acción social y los medios para conseguirlas. Sin embargo, suelen polarizarse y enfrentarse en torno a la manera de conducir una economía y a los prerrequisitos sociopolíticos que supone cada concepción diferente. No pocas coyunturas de crisis política se han gestado, al menos parcialmente, a raíz de la pérdida de unidad y del enfrentamiento entre los principales segmentos de las clases dominantes.² Éste fue un componente central en la coyuntura que dio inicio a la Revolución mexicana.

El terreno sobre el cual se produce esta lucha estratégica es naturalmente el de las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales en las que los diferentes segmentos y fracciones ocupan (y luchan por ocupar) un lugar y desempeñan papeles específicos. Este lugar y estos papeles son por definición relativos a los que desempeñan otros sectores de la sociedad.

Las fases del desarrollo capitalista de una sociedad determinada se suceden de acuerdo con diferentes modos de organizar las relaciones sociales, en función de las finalidades generales y particulares de la acumulación. Estos distintos *modos* atañen a la forma en que los diversos sectores de la clase dominante se relacionan entre sí y con el resto de la sociedad, encontrando en ella apoyos y resistencias.

Una de las principales preocupaciones actuales y relativamente

privada como principio estructural de la reproducción del orden económico y social, pero las formas históricas concretas que este principio adopta y el modo como evolucionan no se constituyen *a priori* como operación lógica, sino en el crisol de la acción social.

² A este respecto la bibliografía es abundante. Conviene citar como ejemplo reciente la investigación de Theda Skocpol, *Los estados y las revoluciones sociales*, FCE, México, 1986, en la que se examinan bajo esta perspectiva las revoluciones francesa, rusa y china.

recientes de las ciencias sociales en México es el estudio de los cambios que ha experimentado la organización de las clases dominantes en torno al poder político y al conjunto de la sociedad. En parte como eco y extensión de una creciente atención de la historiografía hacia el papel de estos agentes en las revoluciones políticas de México, el interés actual de la sociología y la ciencia política por este problema coincide con su agudización en los hechos. El país atraviesa por una reorganización económica que ha puesto a la orden del día, implícita y explícitamente, el problema de los pesos relativos y las alianzas de diferentes sectores sociales en el rumbo que se debe seguir. Este “rumbo” o vía representa un modo de (re)asignar los recursos sociales para la reproducción con la consiguiente transformación de los poderes existentes. Sobresale como expresión de este fenómeno la creciente inconformidad política entre algunos sectores de las clases medias y altas, la declinación electoral del PRI y el significativo ascenso del PAN en algunas regiones, principalmente del norte del país.

Uno de los principales obstáculos para la observación de este fenómeno es, sin embargo, que la proximidad de los acontecimientos dificulta el acceso a la información acerca de cómo se libran las batallas y se establecen los pactos y acuerdos entre las cúpulas dominantes. A diferencia del historiador, que puede disponer de fuentes documentales —a veces muy completas— para estudiar sucesos pasados, el sociólogo o el politólogo suele basarse en la inmediatez de los acontecimientos y en la novedad de los datos empíricos. Por lo mismo sus variables e indicadores suelen ser más provisionales que los de otras disciplinas.

Con estas precauciones, pues, trataremos de aventurar una aproximación a este hecho tomando dos indicadores principales: 1) la evolución e implantación de lo que podría denominarse una nueva voluntad de inserción de la empresa privada y el empresariado en el *orden* social,³ y 2) la *convocatoria* a la movilización sociopolítica de ciertos sectores para “fortalecer la sociedad civil frente al Estado”, que se ha visto notablemente fa-

³ Se entiende aquí por orden social la estructura material que determina una forma de distribución del poder en torno a la reproducción social. Esta estructura material contiene tanto un componente económico (acumulación y distribución), como político (gobierno, organización y representación de intereses, lucha por el poder formalizado en instituciones) e ideológico (forma y grado de los antagonismos en torno al *poder* en los discursos sociales).

vorecida por el desenvolvimiento (tanto internacional como nacional) de una corriente ideológica conservadora que va adquiriendo creciente importancia entre las clases dominantes y medias a nivel económico y político.

La metodología que ha guiado el tratamiento de esta problemática proviene de la teoría de la ideología y del análisis del discurso. En éstos, el estudio de los textos emitidos por un agente social admite la distinción de, al menos, dos momentos: *a)* la producción, y *b)* la recepción o consumo. Entre ambas media la circulación, que puede ser entendida como momento de la primera.⁴ Este tipo de análisis busca describir cómo un determinado actor político *significa* en su discurso los antagonismos sociales (p.e. capital *vs.* trabajo, sociedad *vs.* Estado, democracia *vs.* autoritarismo, etc.), y constituye posicionalidades de adversarios, aliados y apoyos. También intenta explicar los efectos que este discurso produce en sus destinatarios directos o indirectos a través de la observación del consumo que éstos hacen del primero. Este artículo se centra en las características de la convocatoria empresarial hacia la sociedad civil; es por tanto un análisis de la producción y no de la recepción del discurso con la misma exhaustividad. Sin embargo, con base en la utilización de diversos materiales se muestran los efectos y las probables consecuencias que configuran esta convocatoria como fenómeno con características novedosas.

II. El problema

Desde el punto de vista de la reorganización de la clase dominante, México ha pasado por diferentes etapas desde el fin del periodo armado de la Revolución (1910-1920). Como es comúnmente admitido, la primera de ellas se inicia con el triunfo mismo de la Revolución que abre curso a la recomposición de los pactos y alianzas entre los poderes pre-revolucionarios sobrevivientes⁵ con los caudillos militares triunfantes. En este

⁴ Una fundamentación amplia de este punto de vista puede hallarse en mi artículo "Notas sobre las relaciones entre ideología y política", en varios autores, *Sociedad, política y Estado*, CIDE, México, 1982, pp. 135-166. Véase en el mismo sentido Emilio de Ipoia, "Crítica de la teoría althusserista de la ideología", en *Arte, Sociedad, Ideología*, núm. 7, pp. 67-91.

⁵ Ver John Womack, "The Mexican Economy during the Revolution: 1910-1920,

periodo se presenta una tendencia muy acusada de incorporación de elementos de la vieja élite porfiriana a la administración estatal pública y una renovada penetración de los caudillos en el mundo de los negocios privados⁶ conformando, ambas, lo que hoy conocemos como “familia revolucionaria”, es decir, la élite que representa la cúpula del régimen político.

Posteriormente, la creación del Partido Nacional Revolucionario y su posterior transformación en Partido de la Revolución Mexicana en el marco de las reformas cardenistas (luego convertido en el actual PRI), sentó las bases que, bajo un cambio del modelo económico dirigido hacia la industrialización acelerada del país, hicieron posible la consolidación de una burguesía industrial y financiera que profundizó, bajo nuevas condiciones, las tendencias monopolistas dominantes en la economía mexicana desde fines del siglo XIX. Esta última fase, conocida como etapa de sustitución de importaciones y “desarrollo estabilizador”, culmina en la actualidad con la aparición de ciclos recesivos cada vez más cortos que revelan el carácter *estructural* de la crisis económica y confluye con el inicio de un replanteamiento mundial de las relaciones económicas y de la competencia entre estados y regiones del mundo.

Esta situación ha generalizado las condiciones de crisis del modelo económico y ha abierto una etapa en la que también entran en crisis algunos de los rasgos del sistema político.⁷ Entre estos últimos se cuentan diversos aspectos del modelo o los modelos de relación de los intereses económicos privados y el poder político. Estos aspectos pueden distinguirse en cuatro áreas principales: 1) la reorientación del aparato productivo hacia el

historiography and analysis”, *Marxist perspectives*, Vol. 1, núm. 4, invierno de 1979, pp. 80-123.

⁶ Ver entre otros trabajos recientes el de Hans Werner Tobler, “Trama y drama de la Revolución”, en *El Buscón*, núm. 15, 1986, pp. 12-22.

⁷ Dado el carácter *estructural* de la crisis económica mexicana es natural que las cúpulas económica y política busquen encauzar el aparato productivo bajo un nuevo modelo de acumulación. Éste, a su vez, reclama el ajuste de las relaciones políticas a sus nuevas exigencias, entre las cuales destaca la disminución del papel intermediario del Estado en las relaciones entre agentes sociales y un aumento de la influencia del mercado en ellas, especialmente en lo que se refiere a las relaciones entre capital y trabajo. Un detallado análisis de la transformación económica del país (de la sustitución de importaciones al modelo “secundario exportador”) puede encontrarse en el libro de José Valenzuela Feijóo, *El capitalismo mexicano en los ochenta*, Era, México, 1986. En el mismo trabajo el autor hace un breve comentario acerca de las consecuencias que el nuevo modelo económico acarrea para la organización de la dominación.

exterior y la reprivatización de las empresas estatales; 2) la tendencia del sector privado (principalmente de su facción radical) a la participación abierta y militante en la política partidaria y electoral; 3) la remodelación de las estrategias corporativas para incidir en la definición de políticas públicas, y 4) la puesta en marcha de estrategias ideológicas y de movilización de amplios sectores sociales (principalmente de las clases medias) desde las organizaciones representativas del empresariado.⁸

En este contexto, varios procesos han dado lugar a la aparición y al desarrollo de corrientes de pensamiento conservador. O podría mejor decirse que la evolución de la crisis y la reorganización económica nacional e internacional han exigido y favorecido la consolidación y el fortalecimiento de un proyecto económico conservador en las filas de los empresarios y de la alta burocracia gubernamental, especialmente en el “gabinete económico”.

Los componentes principales de este proyecto son las estrategias que buscan replantear el lugar que los empresarios ocupan en la vida *social* por medio de un conjunto de mecanismos ideológicos e institucionales puestos en marcha desde principios de los años sesenta pero que se hicieron más visibles a mediados de la década de los setenta, y que han alcanzado un poder de nuevas dimensiones a partir de la nacionalización de la banca en septiembre de 1982.

A partir de ese acontecimiento, varios organismos de la iniciativa privada organizaron en diferentes partes del país una serie de asambleas denominadas “México en la libertad”.⁹ Sus objetivos consistían en convocar a los organismos y a las bases empresariales a movilizarse para resistir y combatir la medida adoptada por el presidente José López Portillo e incidir en la opinión pública en el mismo sentido.

Mientras esas movilizaciones adquirieron un curso intenso, los grupos financieros e inversionistas bancarios directamente

⁸ Con respecto a los puntos 2 y 3 véanse los trabajos de Ricardo Tirado y Matilde Luna respectivamente en este número. Cabe agregar que los aspectos contenidos en dichos puntos constituyen una *ruptura* —y, a la vez, el terreno de una *transición*— de crecientes núcleos empresariales con un rasgo definitorio de su práctica política anterior: la subordinación a la fracción estatal de la burguesía y su abstención de participar más ampliamente en la escena política.

⁹ Además de una Asamblea Nacional Empresarial convocada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pocos días después pero que fue cancelada.

afectados en sus intereses fijaron su atención en el presidente electo Miguel de la Madrid, cuyo gobierno, a la postre, garantizó una resolución satisfactoria y provechosa de este conflicto mediante una generosa indemnización, el aliento a la instauración de un nuevo sistema financiero privado en las casas de bolsa y la reprivatización del 34% de las acciones de la banca nacional.¹⁰

De esta suerte, las reuniones “México en la libertad” sirvieron de contexto de presión para encontrar el camino de la restauración del poder de los grupos financieros y generar críticas sistemáticas del gobierno y del sistema político con una base social amplia que ha desembocado en la consolidación de una ideología antigubernista generalizada entre los empresarios y los sectores medios. Esta dinámica, que hace confluír la intención de las cúpulas empresariales por cambiar diversos aspectos de las relaciones políticas con la irritación y el descontento de los sectores medios, es un fenómeno nuevo que contribuye a hacer avanzar la atención del Estado por los intereses del sector privado, en detrimento de otros grupos sociales.

Así, la nacionalización bancaria reanimó una tendencia que ya había aflorado en el empresariado radical en 1976: extender la convocatoria a la movilización de sectores sociales amplios en contra del gobierno y del “autoritarismo” del régimen, plasmado, según este discurso, principalmente en las facultades discrecionales del Presidente de la República para afectar la modalidad de los intereses de las fracciones del capital.

Como antecedente de esto, debe señalarse que las iniciativas empresariales para conseguir ciertos objetivos directa o indirectamente relacionados con la defensa de la empresa privada tienen antecedentes que se remontan a episodios como el de la fundación de la Confederación Patronal de la República Mexicana en 1929 en respuesta a la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, a la oposición —después— a las reformas cardenistas, a la lucha contra el libro de texto único a principios de los años sesenta y a la orquestación de movimientos anticomunistas a raíz del triunfo de la Revolución cubana. Sin embargo, no es sino hasta finales del sexenio de Echeverría cuando, a propósito del

¹⁰ Una descripción detallada de estos acontecimientos puede encontrarse en mi artículo “¿Hacia donde va la banca?”, *Casa del Tiempo*, núm. 51, UAM, México, abril de 1985.

proyecto de ley de asentamientos humanos, se convoca a una movilización social en contra que efectivamente logra aumentar la *articulación* de los estratos medios urbanos. Desde entonces, la cúpula empresarial sabe que cuenta con un potencial de apoyo, con una masa de maniobra que le permite vislumbrar un arraigo social que incluye no sólo a los propietarios de empresas y funcionarios de sus organizaciones representativas más importantes, sino a un sector de la opinión pública y a los movimientos políticos de derecha (además de su creciente influencia en el partido del Estado).¹¹ Esta articulación tiende a adquirir una presencia más permanente que en el pasado y sus conductores buscan deliberadamente su expansión, tanto por los temas que abarcan como por los grupos en los que trata de incidir y los medios que utiliza para hacerlo.

A riesgo de simplificar, estos hechos marcan simbólicamente el fin de una etapa política nacional, entre cuyas principales características se hallaba una división del trabajo entre las élites tal que los empresarios se ocupaban de las actividades propias de la industria, el comercio o las finanzas, limitando su participación política a las consultas (o el veto) sobre la política económica, mientras que la burocracia estatal y los sectores del PRI se hacían cargo de la actividad política. Desde 1982 se puede observar con mayor claridad una voluntad política empresarial de desempeñar un papel creciente en la dinámica de las decisiones nacionales de todo tipo, remplazando su *status* "subordinado" al sector público por otro de distinta naturaleza.

Los grupos moderados y la facción radical del sector privado¹² han comenzado a impulsar la tesis de que la manera en que están representados en el sistema político es insuficiente e inadecuada por cuanto implica *ceder* al régimen el control sobre sus formas de asociación y autoexcluirse de las actividades partidarias y electorales. Igualmente esto ha significado que el empresariado mexicano presente una imagen desfavorable, cuando no grotesca y satanizada, ante la opinión pública.

¹¹ Véase al respecto el artículo de Ricardo Tirado en este número.

¹² Respecto a esta distinción véase Carlos Arriola y Juan Gustavo Galindo, "Los empresarios y el Estado en México (1976-1982)", *Foro Internacional*, vol. XXV, núm. 2, octubre-diciembre de 1984, El Colegio de México, así como M. Luna, R. Tirado y F. Valdés, "Businessmen and politics in Mexico 1982-1986", en R. Anzaldúa y S. Maxfield (eds.), *Government and private sector in contemporary Mexico*, Monograph Series, 20, Center for U.S. Mexican Studies, University of California, San Diego, 1987, p.13.

De ahí que la diversificación de la *convocatoria* de las cúpulas empresariales comporte un doble movimiento de remodelación de su presencia en la vida nacional y del modo en que las demás clases sociales deben relacionarse con el sector privado. Aunque con diferentes modalidades, según el subsector empresarial de que se trate, el eje de este doble movimiento es la búsqueda de legitimidad plena para intervenir en la acción política encaminada a la obtención de un nuevo liderazgo social que facilite aún más la privatización de las relaciones sociales.

No es casual que este fenómeno adquiera una sistematicidad y una intensidad sin precedente en un momento en que el país transita hacia un modelo económico nuevo en cuyo centro neurálgico se opera una transformación de las relaciones entre diferentes fracciones del capital y entre éstas y los trabajadores industriales. Respecto a esto último, la orientación de la política económica por la cual ha presionado con constancia la cúpula empresarial gira en torno a tres ejes: a) volcar el aparato productivo hacia el exterior; b) reducir y refuncionalizar la intervención económica del Estado, y c) transformar los regímenes de negociación salarial reduciendo el poder de los grandes sindicatos y permitiendo negociaciones diferenciales por empresa.¹³

III. Las formas de la convocatoria social del empresariado

Esta convocatoria se ha manifestado en un nuevo discurso político emitido por las organizaciones empresariales y sus líderes, especialmente por aquellos que forman parte de la facción radical, tales como la Coparmex, la Concanaco y en determinados momentos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Este discurso se caracteriza por atribuir los problemas actuales del país no sólo a factores económicos sino también políticos, principalmente la ausencia de una participación ciudadana más activa y el excesivo poder concentrado en el presidente de la República. Estos dos problemas se condicionan recíprocamente y debido a ello es necesario romper la cadena que los une. Al referirse a la falta de participación ciudadana, los empresarios hacen especial énfasis en su propia abstención de participar más intensamente en la vida política nacional.

¹³ Cfr. Luna, Tirado, Valdés, *op. cit.*, pp. 25-26.

En octubre de 1982, al calor de los acontecimientos posteriores a la nacionalización bancaria, Alfonso Pandal, presidente de la Concamin y perteneciente al sector moderado, afirmaba que en México el Estado ha absorbido funciones “más allá de lo conveniente” debido a la débil presencia ciudadana; como resultado de ello no existen mecanismos que hagan posible una “presencia pública y política [de los empresarios] para la defensa de sus valores, tradiciones y convicciones, que se ven menci-llados por las limitaciones de las garantías individuales...”¹⁴

En este sentido los dirigentes de la facción radical han sido mucho más enfáticos al señalar la necesidad de cambiar esta situación mediante el fortalecimiento y la creación de “organismos intermedios” (que van desde partidos políticos y asociaciones cívicas hasta organizaciones empresariales y profesionales) y de la movilización de la opinión pública. Más aún, hay quienes sostienen que ante la “ineficiencia” del diálogo con el poder público, “la única salida posible es su sustitución mediante la lucha en el mismo terreno [por] la conquista del poder”.¹⁵

La respuesta del PRI a estas posiciones no se hizo esperar e involucró al mismo presidente De la Madrid. Se acusó a los organismos empresariales de violar la prohibición, señalada en la Ley de Cámaras, de intervenir en asuntos políticos que no sean de su competencia.

A partir de esta reconvencción diversos líderes del sector privado, señaladamente los antes mencionados, incorporaron a su discurso una sutil distinción entre “lo político” y “la política”. Lo político es entendido, así, como “cualquier acción u opinión que un grupo social emita y que tenga como resultado una toma de decisión gubernamental, [...] en tanto afectan [...] a la esfera de la institucionalidad que organiza la vida colectiva, al Estado...”, mientras que la política englobaría aquellas acciones orientadas a la “posesión del poder del Estado por mandato de representación popular”.¹⁶

La novedad de este tema en el discurso de los dirigentes empresariales reside en el *reconocimiento* de que sus actos son políticos. En los diversos intentos por diferenciar entre un ámbito

¹⁴ Alfonso Pandal Graf, “La participación empresarial”, *Concamin*, núm 747, octubre de 1982, pp. 5-6.

¹⁵ Emilio Goicoechea Luna, discurso pronunciado el 9 de febrero de 1983, en *La crisis y la Libertad*, Concanaco, México, 1985, p. 220.

¹⁶ Alfonso Pandal Graf, *Concamin*, núm. 750, marzo de 1983.

legítimo para la acción empresarial (lo político) y otro que no lo es (la política), puede reconocerse el gran interés por especificar ámbitos de acción que desbordan de hecho los canales tradicionales de su participación, habitualmente circunscrita a influir en la política económica gubernamental. El síntoma de este desbordamiento lo constituye la aparición misma de la necesidad de establecer esta distinción y, más aún, el hecho de que la búsqueda de nuevas formas de participación política tienden en la práctica a nulificar la separación entre las formas permisibles de intervenir en la vida pública y aquellas que no lo son, como, por ejemplo, el apoyo a partidos políticos de oposición.

Como se señaló, las principales estrategias políticas puestas en marcha por los empresarios en la coyuntura actual son tres: 1) la *corporativa*, que persigue sobre todo influir en las políticas, así como en la adecuación de los organismos empresariales con este motivo; 2) la *partidaria*, que se refiere a la participación de empresarios *como tales* en las contiendas electorales, y 3) la *social* o *cívica*, que busca la formación de un nuevo consenso en la sociedad civil. Centraremos la atención en esta última.

La estrategia cívica encaminada a la formación de un nuevo consenso para la participación política ha implicado tres operaciones ideológicas básicas: la extensión de la noción y el ámbito de la política válida, la oposición gobierno-sociedad como el hilo conductor para comprender y definir la organización misma de la sociedad y, por último, la postulación de una identidad radical entre la idea de *iniciativa privada* y sociedad civil.

Al primer punto ya nos hemos referido al hablar de la distinción entre la política y lo político que permite realizar una operación semántica de ampliación del campo legítimo para la acción política del sector privado. En cuanto al segundo factor conviene detenerse un poco más en él.

Es un hecho universal el que toda oposición a un gobierno establecido aparezca en la escena política como un antagonismo al orden establecido. El grado y la forma de construir ideológicamente este (o estos) antagonismo depende del tipo de proyecto que enarbole; puede admitir una gama muy amplia, que va desde la transformación completa de ese orden y su sustitución por otro, hasta la reforma de determinados aspectos de la realidad que representa.

El discurso político de la facción radical del empresariado ha elaborado una crítica del sistema político mexicano que toma

como eje la oposición entre gobierno y sociedad como antagonismo central para la comprensión de la situación actual. A su entender, durante un largo proceso histórico el Estado mexicano ha ido abarcando el espacio social en forma omnimoda. Pero a diferencia del pasado, en el que según su punto de vista la resistencia social al Estado era mínima o poco relevante, la “maduración” de la sociedad (y por ello puede entenderse el crecimiento de los sectores medios urbanos, así como el propio crecimiento de la institucionalidad privada) ha dado por resultado una voluntad de participación democrática, ciudadana, que rechaza las características tutelares y autoritarias que el régimen ha impreso en la dinámica política. De ahí, entonces, que el surgimiento de ámbitos de “resistencia” a la omnipresencia estatal sea vindicada por los empresarios radicales como fundamentación de un proyecto democrático. Sin embargo, no se trata de una democracia en abstracto, sino de una concepción conservadora de la democracia que al mismo tiempo que exige el retiro del Estado de la actividad económica para ceder su lugar al pleno funcionamiento de las leyes del mercado, busca propiciar mecanismos de competencia política y de alternancia en el poder para los distintos grupos y fracciones (o sus *representantes*) de la clase dominante, dentro de la cual los empresarios se transfigurarían en intérpretes y líderes de la voluntad general del “pueblo”.

En los años recientes algunos de los organismos cúpula de la facción radical han sostenido, con inusitada frecuencia y metódicamente, una estrategia de convocatoria deliberada a la “sociedad civil” para apoyarse en ella a fin de construir espacios alternativos al control gubernamental de la opinión pública. Sin duda, la acción del sindicato patronal Coparmex ha sido la más notable en escala nacional. En lo que lleva transcurrido el actual sexenio (1982-1988) este organismo ha tenido tres máximos dirigentes: José María Basagoiti, Alfredo Sandoval González y Bernardo Ardavín. Los tres han desarrollado una actividad constante en el sentido que hemos mencionado.

En respuesta a las críticas que el PRI dirigió a varios organismos empresariales por su intervención en actividades políticas (a las que ya nos referimos brevemente) la Coparmex difundió ampliamente entre la opinión pública su postura, al respecto: “La posición del PRI no es un ataque a los empresarios, sino en verdad es un intento de limitar la libertad de expresión de los

ciudadanos agrupados en todos los organismos y sociedades intermedias de este país, porque si los organismos empresariales no pueden expresar una ideología, ni ejercer su derecho a disentir, ni manifestar sus opiniones sobre los problemas del país, tampoco podrán hablar los sindicatos, ni los organismos profesionales, ni las asociaciones de colonos, ni los locatarios, ni las uniones de productores, ni las agrupaciones de contribuyentes, ni los pensionados, etc., etc.”¹⁷

Esta inclusividad del discurso empresarial no se limita a fincar un papel dirigente sobre el resto de la sociedad, sino que va más allá: identifica como perteneciente a la iniciativa privada a todo aquel que no vive del servicio al Estado. Un antecedente en este sentido es lo señalado por el CCE en su Declaración de Principios en 1975: “el sector privado no sólo está integrado por los banqueros y grandes, medianos y pequeños industriales y comerciantes, sino también por los agricultores, ganaderos, artesanos, profesionistas, empleados y obreros”.¹⁸ En 1982 el entonces presidente de este organismo afirmó que “pueblo, gobernados, ciudadanos, particulares, iniciativa privada, son términos equivalentes...”¹⁹ En la actualidad este punto de vista ha alcanzado ya el rango de un modelo ideológico alternativo²⁰ que

¹⁷ Coparmex, *55 años por la libertad*, México, 1984, p. 43. En el mismo folleto se hace muy amplia referencia a la necesidad de que los empresarios participen en política. Los artículos y discursos recogidos en él pertenecen a notables empresarios radicales como Manuel Clouthier, Alfredo Sandoval, José Luis Coindreau, Jorge Orvañanos, etc. Significativamente se reitera a lo largo de todo el documento la idea de que se persigue una “toma del liderazgo social”: “al cumplir su 55 aniversario de existencia, la Confederación Patronal de la República Mexicana ha evolucionado hasta acceder a esta fecha convertido en un sindicato patronal que amén de aglutinar empresarios y representar sus intereses, se ha convertido en una voz que se levanta en nombre de amplios sectores de la población mexicana para demandar, denunciar y exponer aquello que las grandes mayorías no pueden hacer”, p. 37 (subrayado nuestro). También puede consultarse el folleto editado por la Coparmex, *Modernización o crisis y autoritarismo*, que contiene las ponencias presentadas en la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria (octubre de 1986) y en las que se distingue una visión depurada del liderazgo social de los empresarios como vía de salida de la crisis actual.

¹⁸ CCE, *Declaración de principios*, IX, 3, México, 1975.

¹⁹ Concanaco, *Decisión*, núm. 46, diciembre de 1982.

²⁰ Cabe aclarar aquí que el carácter *alternativo* de este modelo no implica necesariamente una sustitución de la burocracia priista por una no priista en el régimen político, sino de que haga suyos los componentes esenciales de esta ideología y garantice su *centralidad* en la organización de las relaciones entre el estado y la sociedad. Esta observación es tanto más importante por cuanto los conflictos entre el sector privado y el gobierno han tomado un curso de mayor adecuación de los intereses del primero en el segundo a riesgo, inclusive, del desplazamiento de segmentos de la burocracia política descontentos con este proceso hacia la periferia del sistema.

se va abriendo camino mediante una estrategia deliberada de opinión pública en escala nacional. En ésta sobresale una campaña radiofónica en la cual las definiciones coloquiales de la iniciativa privada abarcan a todo aquel que desempeña actividades individuales en la producción o circulación de mercancías haciendo abstracción de las posiciones diferenciales de los agentes sociales en dicho proceso.

El desenvolvimiento cada vez más *organizado y concertado* de esta estrategia de convocatoria social contribuye a orientar el descontento y la irritación social hacia una identificación entre empresarios y sectores medios, creando una articulación ideológico-política alternativa a las instancias tradicionales del sistema político.²¹

Los rumbos que ha seguido esta estrategia alcanzan muy probablemente espacios insospechados de la vida social que al madurar se expresarán con fuerza creciente en el futuro. Entre éstos pueden identificarse con claridad: *a)* la difusión sistemática de los valores asociados a la libertad de empresa en los ámbitos de la opinión pública y los medios masivos de comunicación, la educación y la cultura, en convergencia con el ascenso del pensamiento neoconservador en otras esferas de la vida política; *b)* el impulso a la formación de asociaciones intermedias, y *c)* el apoyo de diversos movimientos sociales.

Por lo que se refiere a los dos primeros aspectos, salta a la vista que a partir del segundo lustro de los setenta (que arranca con la creación del CCE y la crisis de confianza de 1975-1976), la ideología empresarial va siendo marcada progresivamente por el objetivo de mejorar su imagen social, deteriorada por una larga tradición de abstención política y las críticas de otros agentes sociales. En la actualidad la práctica derivada de este objetivo ha permitido consolidar un sistema privado de educación superior capaz de suministrar cuadros profesionales tanto al sector empresarial como al público. Por otro lado, aunque debe reconocerse la falta de una mayor investigación empírica sobre el crecimiento de las "organizaciones intermedias" y sus relaciones con el sistema de empresas y organizaciones en el periodo reciente, puede aventurarse la hipótesis de que han acompañado en gran

²¹ Para algunos antecedentes de este proceso en los años setenta puede consultarse a Julio Labastida (comp.), *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, Alianza Editorial Mexicana-UNAM, México, 1986, pp. 367-455.

medida la expansión de la politización empresarial, contribuyendo a establecer un oponente político sólido, combativo con el gobierno y con el polo de oposición social y política de izquierda. La Constitución de este oponente ha introducido modificaciones en la escena política nacional que coinciden con cambios profundos en el estilo del gobierno, disidencias internas en el partido oficial y la emergencia de nuevos y viejos actores políticos bajo las condiciones impuestas por la crisis económica.²²

IV. Los movimientos sociales

Ahora bien, se han registrado en los últimos años movimientos sociales impulsados por sectores empresariales que pueden clasificarse en cuatro tipos: 1) cívicos por la defensa del voto, 2) contra la intervención económica del Estado y su influencia en la política económica, 3) en pro de demandas sociales específicas, y 4) movimientos de opinión pública y catalización de descontentos latentes.

Los movimientos del primer tipo han estado acompañados por una participación de los organismos y líderes empresariales en los procesos electorales y por la convergencia entre éstos y el PAN, sobre todo en el norte del país.

Desde enero de 1985 la Coparmex instruyó a sus afiliados acerca de que el organismo como tal no podía inmiscuirse en las elecciones y que, por tanto, aquellos directivos del sindicato patronal que fueran postulados por un partido a contender por un puesto de elección popular deberían renunciar previamente a su cargo.²³ No obstante, más adelante, al comentar los propósitos de la XLVI Asamblea, su presidente advertía que la "Coparmex no acepta que se denomine actividad política a nuestra presencia ideológica..."²⁴ y cerca ya de las elecciones federales de 1985 se autodefinió como "vigilante" de este proceso, denunció

²² Además del PAN y la Iglesia hay que mencionar a las organizaciones campesinas de nuevo tipo, como las coordinadoras regionales, el movimiento estudiantil universitario y la inconformidad en aumento de la clase obrera. Además, los cambios en los patrones de relación entre las diversas regiones del país y el centro en los cuales desempeñan un papel de importancia los empresarios locales. Cf., p.e. Jorge Zepeda Patterson, "La nación versus las regiones", en *La Jornada Semanal*, núms. 123 y 124, enero-febrero de 1987.

²³ *Excélsior*, 26 de enero de 1985.

²⁴ *Excélsior*, 15 de marzo de 1985.

irregularidades en el padrón electoral²⁵ y exigió se respetaran los resultados de la votación. A esta intervención se sumaron muchas otras de distintos centros empresariales y patronales de provincia, entre los que resaltan los de Monterrey y Chihuahua.

Pero el caso más sonado fue el de las elecciones en este último estado en julio de 1986. Los organismos empresariales locales (Centro Empresarial, Caintra, Canaco) propusieron la nulificación de las elecciones debido al fraude electoral y convocaron a un paro empresarial de 12 horas. A nivel nacional la Coparmex, por medio de su máximo dirigente, expresó el apoyo de los 52 centros patronales del país a las acciones de rechazo al fraude, añadiendo que los empresarios "tenemos el derecho de intervenir en política, sin pedir autorización a nadie..."²⁶ Por lo demás, para todos los sectores de la opinión pública fue evidente que así como un sector radicalizado del empresariado de la localidad intervino activamente en las movilizaciones de protesta por las irregularidades electorales denunciadas, otro segmento no sólo apoyó al gobernador declarado electo, sino que incluso formó parte de su gabinete.

La justificación teórica de este tipo de movilizaciones se basa en la "obligación" empresarial de defender el *bien común*, con lo cual agregan una dimensión de universalidad a su convocatoria, la cual facilita la proyección de los objetivos de los organismos de la iniciativa privada sobre la sociedad. La facción radical ha mostrado además su capacidad para poner en movimiento organizaciones con una base social compleja.²⁷ Por otro lado, aun sin entrar a detallar las alianzas concretas entre empresarios y otras fuerzas como la Iglesia y el PAN, la existencia misma de estas formas de movilización abona el terreno para la maduración y el establecimiento de compromisos.

El discurso político que acompaña a esta acción²⁸ busca dejar una huella ideológica en varios destinatarios: 1) Los propios empresarios, como sujetos llamados a aumentar su intervención en la vida cívica y política; 2) la ciudadanía, depositaria de la obligación y el derecho de modificar el sistema político hacia una situación en la que las clases, los "sectores" y las corporaciones

²⁵ *Excélsior*, 7 de julio de 1985.

²⁶ *Excélsior*, 25 de julio de 1986.

²⁷ Por ejemplo, Desarrollo Humano Integral, A.C. y Acción Ciudadana.

²⁸ Y que por lo demás *se compone* de y se constituye en este discurso en muchas ocasiones.

sean reemplazadas por una figura diferente: la “persona”, el ciudadano individual; 3) el gobierno y su partido, culpables impugnados del monopolio político, el fraude electoral y el autoritarismo, y 4) los partidos de la oposición real de izquierda, a quienes se trata de invalidar y cerrar el camino debido a su cuestionamiento de la propiedad privada.

El segundo tipo de movimientos, contra la intervención del Estado en la economía, es quizás el de mayor regularidad y constancia en la acción permanente de los organismos de representación empresarial; cuenta además con foros extraordinarios como el de las reuniones “México en la libertad”, a las cuales ya nos hemos referido, o el recientemente celebrado “Primer Foro Iberoamericano de Empresarios”.²⁹ Entre las principales reivindicaciones que postulan se cuentan los elementos primordiales del neoliberalismo económico, tales como el retiro y achicamiento del gobierno, el predominio de las leyes del mercado y la reorientación del aparato productivo hacia el exterior. En suma, se postula al empresario como figura central del nuevo estilo de la reproducción general de la sociedad.

Por lo que se refiere a los movimientos por demandas sociales el más importante es el que se produjo a raíz de la “revolución educativa” y los libros de texto, y en menor medida, por la despenalización del aborto. Ante el anuncio hecho por Miguel de la Madrid en su primer informe de gobierno de que se emprendería una política que revolucionaría la educación removiendo viejos obstáculos y mejorando los estándares de eficiencia, diversos “organismos intermedios”, como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y la Asociación Nacional de Escuelas Privadas (ANEP), iniciaron un combate renovado contra la “educación totalitaria”, el contenido “socialista” de los libros de texto y a favor de la defensa de la educación privada y religiosa, así como de la reforma (en tal sentido) de los artículos 3o. y 130o. constitucionales. Junto con estas organizaciones se pronunciaron igualmente la Coparmex, el CCE y luego la Concanaco. Este tema además ha concitado tradicionalmente el apoyo activo del PAN y de la jerarquía católica.

En Nuevo León, Sinaloa y Jalisco fue donde el conflicto adquirió mayores proporciones. En el último estado adoptó las dimensiones de un movimiento social en el que participaron abier-

²⁹ En la ciudad de México del 11 al 13 de marzo de 1987.

tamente los organismos patronales y culminó en la ciudad de México en el "Día Nacional de la Libertad de Enseñanza",³⁰ convocado por la UNPF. En Nuevo León, el centro patronal solicitó al Presidente de la República un programa de estímulos fiscales para las escuelas particulares y creó un patronato en defensa de la educación privada.

Otro movimiento de esta naturaleza fue el que se dio a raíz de los sismos de septiembre de 1985. Sobresale el "Primer Encuentro de Solidaridad Social y Reconstrucción Nacional" que el 1 de diciembre de ese año reunió, con la participación activa de la Coparmex, a estudiantes universitarios y empresarios.³¹ También salta a la vista que las actividades sociales extraordinarias que siguieron a los sismos abrieron involuntariamente nuevos espacios de acción empresarial al integrarse a las comisiones oficiales y comités de donaciones y auxilio.³²

Por último, el movimiento contra la despenalización del aborto atrajo también el apoyo empresarial. Convocado por el Comité Pro-Vida, recibió el aliento del presidente del CCE, la jerarquía eclesiástica y la Asociación Cívica Femenina; esta última tiene estrechas relaciones con la facción radical del empresariado y el PAN.³³

El cuarto tipo de movimientos (opinión pública y descontentos latentes) permite identificar ciertos momentos o situaciones de elevada tensión o expectación social generalizada en los cuales, sin existir un claro liderazgo que oriente la acción en determinado sentido, los organismos empresariales han aparecido como configuradores de identidades entre intereses, grupos y sujetos muy diversos sobre la base común de la crítica y el ataque a las instituciones gubernamentales.³⁴

³⁰ El 7 de abril de 1984. Asimismo la UNPF llevó a cabo una campaña contra el artículo 3o. apoyada expresamente por el Centro Empresarial de Jalisco, la Comisión Episcopal y la Comisión de Educación de la Coparmex y que culminó en una manifestación de 15 000 personas seguida, empero, por otra de 60 000 en contra de incluir la religión en los programas escolares. *Información Sistemática*, mayo de 1984.

³¹ El tono de la reunión se caracterizó por un virulento antigubernismo y la manifestación de consignas como "¡Viva Cristo Rey!", "¡Muera el socialismo!". Véase *Punto*, 5-9 de diciembre de 1985, pp. 1-4.

³² Véase A. Arreola, *et al.*, *19 de septiembre: un balance sociopolítico* (mimeo.), 1986.

³³ *Información Sistemática*, septiembre de 1984.

³⁴ Los ejemplos más significativos de estas situaciones son el que se dio a fines del periodo de gobierno del presidente Luis Echeverría y el que ocurrió entre agosto y diciembre de 1982.

Cuando este tipo de situaciones está asociado a intereses centrales de sectores empresariales su protagonismo es muy alto y desata, por lo general, campañas de opinión pública que hacen circular con extraordinaria intensidad sus puntos de vista. Se consigue así, entre otros efectos, que segmentos relevantes de la ciudadanía adopten el lenguaje y los temas que distinguen el discurso de los empresarios. No es accidental que a medida que se ha acercado el “año político” de la sucesión presidencial han comenzado a levantarse con insistencia dos temáticas desde los frentes más críticos del sector privado: *a)* que se amplían las “coincidencias” que hay entre patrones y trabajadores, mientras simultáneamente se tensan las relaciones con el gobierno, y *b)* que el sistema político mexicano se está cerrando y tiende a recrudecer su autoritarismo.³⁵

Esta breve tipología de las estrategias empresariales de acción cívica o social es todavía provisional y debería admitir matices más finos. Por ejemplo, el tipo de inserción de organismos y líderes de la empresa privada en estos movimientos varía enormemente. En algunos casos se trata de acciones emprendidas por su iniciativa, en otros se suman a iniciativas ya puestas en marcha; otras veces actúan solos o bien convergen con diversos grupos, etc. Investigar un mayor número de casos nacionales y regionales de estos movimientos conduciría a un acercamiento más próximo a este fenómeno.

V. Conclusiones

Tomadas en su conjunto, las intervenciones políticas de los empresarios en la actualidad no pueden comprenderse sin remitirlas a un proceso paulatino de cambios en la composición y la organización de la clase dominante de la que ellos constituyen una parte. Por supuesto estos cambios involucran tanto a los sectores dominantes en la economía como a aquellos que se encar-

³⁵ Declaraciones de Bernardo Ardavín, presidente de la Coparmex, reproducidas por *Excélsior*, 10, 11 y 13 de octubre de 1986. No obstante, a medida que se acerca el momento en que el PRI formalice la candidatura del sucesor a la presidencia parece haberse avanzado en la idea de que no importa tanto quién sea el elegido, sino que quien quiera que éste sea *continúe* la línea de política económica (digamos neoliberal en el mejor de los casos) del gobierno delamadridista. Ver *Excélsior*, 25 y 27 de mayo de 1987, entrevistas a Claudio X. González, presidente del CCE, y a Juan Sánchez Navarro, prominente miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Fundador del CCE.

gan de las funciones del gobierno. Pero implican además al conjunto de la sociedad en tanto que las variantes y conflictos entre sus proyectos económicos y políticos condicionan nuevos y viejos apoyos y consensos que adquieren un alto nivel de fluidez en la coyuntura actual.

Los organismos empresariales han insistido en que el modo en que están representados sus intereses y organizaciones en el sistema político es deficiente y debe ser reemplazado. También en que su lugar social como líderes de opinión del resto de la sociedad ha sido ocupado precariamente y requiere ser llenado con plenitud.

Podría argumentarse que estas orientaciones de la acción empresarial constituyen nuevos pronunciamientos destinados a estrellarse ante la solidez de la alianza gobernante, pero es necesario contraargumentar que debido a la crisis económica y al proyecto gubernamental de cambios estructurales del aparato productivo, esta alianza atraviesa por una fase de transición que deja atrás progresivamente los ejes del pacto cardenista. En el sitio que ocupaba este último se introducen modificaciones profundas en la racionalidad estatal que incluyen un trato más excluyente de los trabajadores y algunos sectores de las clases medias que el que se dio en el pasado, en aras de conseguir una "modernización" de la economía. Este proceso, aunado al desmantelamiento de la capacidad empleadora del gobierno (de acuerdo con el principio de disminuir su intervención económica), puede constituir un terreno fértil para la disolución de los viejos consensos y la eventual cristalización de nuevas alianzas y movimientos.

En esta perspectiva las diversas organizaciones representativas del empresariado y, más allá, lo que podríamos denominar el complejo institucional privado y sus ramificaciones en la sociedad, cuentan con un potencial de recursos no solamente económicos, sino organizativos, institucionales e ideológicos, que se diferencian nítidamente de los que tenían en el pasado por su vigor y que conjuntados con una nueva voluntad política de intervención en la sociedad y el Estado contribuyen a solidificar un polo de derecha política *in crescendo*.

El aumento de la importancia que el sector privado ha dado a una política dirigida a la sociedad civil tiende a acrecentar la ambigüedad (y las contradicciones) entre la acción de las corporaciones y la apología que éstas hacen del ciudadano indivi-

dual como eje ideológico de un nuevo pacto político basado en el mercado y no en el arbitrio estatal, como ocurrió tradicionalmente desde el cardenismo. En efecto, las cúpulas empresariales han actuado y continuarán haciéndolo en el futuro de manera corporativa, pero podrán hacerlo con más facilidad en medio de una sociedad en la que los sectores populares pierdan unidad y fuerza colectiva, pulverizándose su articulación vertical con el Estado a través de los aparatos de control y negociación, hecho que en efecto constituye el correlato del fenómeno de referencia. Se trata, en suma, de un proceso orientado a modificar la institución global de la sociedad que rejerarquice las figuras de la cultura política en la dirección de una sociedad civil en la que *lo privado*, al imponer su supremacía a lo público y a lo social, se convierta en su principio de estructuración e inteligibilidad.

Sin embargo, aún es prematuro hablar de la configuración que probablemente adquirirán los nuevos pactos sociales y del papel que el Estado y los empresarios desempeñarán en su conformación. Sin embargo, se trata, indudablemente, de un proceso en marcha que cuenta además con vientos favorables en el plano internacional debido al auge de las ideologías neoconservadoras y al impulso directo que el gobierno norteamericano le imprime en los países que se encuentran en su área de influencia.

Mucho se ha discutido si este tipo de acción empresarial busca (y consigue) sentar las bases de un nuevo proyecto hegemónico.³⁶ Desde los límites fijados a este artículo podría decirse que si bien el empresariado, especialmente su facción radical, levanta una convocatoria en contra del sistema político y busca un consenso a sus posiciones entre los sectores medios y la derecha política, es dudoso, sin embargo, que sea verdaderamente capaz de articular a grupos sociales más amplios, en tanto su proyecto económico, de tener libre curso, sería todavía más excluyente que el aplicado por el actual gobierno. Es probable que la convocatoria social de los empresarios consolide y agrande la capacidad de maniobra y el potencial de la derecha haciendo que, más allá de lo ideológico, se adentre en una etapa de lucha por redefinir o remodelar el poder del grupo gobernante aprovechando con éxito la disminución de la credibilidad de este último y, sobre

³⁶ Para un resumen de este debate véase Sergio Zermeño, "Los empresarios frente al Estado", en *La Jornada Semanal*, núms. 94 y 95, 6 y 13 de julio de 1986.

todo, las fisuras internas que actualmente evidencia el partido en el poder.³⁷

Es, pues, dudoso que los empresarios lleguen realmente a constituir una hegemonía alternativa. Pero esto no quiere decir que no conduzcan al cambio del modelo de relaciones políticas y de la forma del sistema político. En el centro del proyecto empresarial en este sentido se encuentra el eje de constituir sus intereses como fracción de la burguesía en los intereses del conjunto de la sociedad bajo una nueva modalidad, buscando activamente el desplazamiento de las operaciones estatales e ideológico-políticas del nacionalismo revolucionario, el cual condensa en su *corpus* discursivo el proyecto histórico de la "familia revolucionaria" desprendido del pacto sociopolítico consolidado en los años treinta.

Si esto es así, nos encontramos en una fase entre cuyas características principales tiende a acrecentarse una *contradicción entre el ejercicio directo del gobierno de la sociedad y los intereses del poder económico cristalizados en el Estado*. Esta confrontación entre los factores principales de poder civil en la sociedad mexicana puede contribuir significativamente al arribo de un escenario de inestabilidad política en el que otros grupos sociales podrían llegar a la conclusión de que las ataduras, consensos y compromisos que los subordinan obedientemente a un mandato estatal han llegado al principio de su fin.

³⁷ Estaría por verse aún la profundidad real de la contradicción introducida en el grupo gobernante por la "corriente democratizadora" y los escenarios a los cuales conduzca. Sin embargo, por primera vez en varias décadas este enfrentamiento parece ir más allá del tradicional *putsch and pull* de la política a la mexicana.